

# Presupuestos millonarios pesada deuda social en el país de la abundancia

## ECONOMÍA

MELISSA NOVOA Y MARIO A. MUÑOZ  
[mf@prensa.com](mailto:mf@prensa.com)

Roberta Samaná ha sufrido toda la vida los sinsabores de la pobreza.

La mujer, de origen emberá, pensó que saliendo de El Coco, en la provincia de Darién, donde nació, y emigrando a la capital tendría mayores ingresos y una mejor atención para su hijo mayor que tiene hepatitis.

Han pasado algunos años de eso, y aunque su hijo tiene acceso a centros hospitalarios mejor equipados que los que tenía en Darién, su situación económica y social no ha cambiado mucho.

Con sus cuatro hijos y su esposo vive en un lugar que solo el nombre es sinónimo de peligro: “El Callejón de la Muerte”, en Curundú.

Su casa es una especie de tambo en la que apenas caben dos colchones, y en la que tiene que convivir día y noche con las aguas negras que corren por debajo de esta.

Y sus ingresos provienen de algunos “camarones” que realiza su pareja, y de lo que le paga la vecina por pelar maíz.

Samaná es una de las caras de la pobreza de Panamá. Según la última Encuesta de Niveles de Vida, en 2008 el índice de pobreza llegó a 32%, 4 puntos porcentuales menos que como se encontraba en 1997 (37%).

Esta cifra muestra una leve disminución en los últimos años y con la promesa que han hecho los últimos gobernantes de un mayor enfoque en su gestión social, ¿podrán Roberta Samaná y su familia salir de esa línea de pobreza?

Esta pregunta no tiene aún respuesta, pero la constante ha sido que un mayor aumento del gasto social sumado a una mayor bonanza económica no son sinónimos de una disminución acelerada de los índices de pobreza.

El crecimiento económico registrado recientemente, -11.5% en 2007 y 9.2% en 2008-, no ha garantizado tampoco el mismo ritmo dinámico en la disminución del número de familias con escasos recursos.

El analista económico Gustavo Chellew al contrastar los datos de los últimos periodos presidenciales, es decir, el de Mireya Moscoso y de Martín Torrijos, con un estudio de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) señala que desde 2001 a 2004, el crecimiento económico fue de 3.6% como promedio anual, mientras que la pobreza y la indigencia disminuyeron 3.5%.

En el siguiente periodo la situación no varió mucho. De 2004 a 2007 el crecimiento económico fue de 8.6% como promedio anual. En este mismo periodo, la pobreza en Panamá disminuyó 4%, al igual que la indigencia.



**SITUACIÓN.** La pobreza no ha disminuido al mismo ritmo que ha crecido la economía. Ilustración/Roy Hernández

“Aunque el crecimiento en periodos iguales (4 años) aumentó como promedio anual más de 100% (de 3.5% a 8.6%), la pobreza e indigencia mantuvieron un ritmo de disminución casi similar, de un 3.5% en el primer periodo a un 4% en el segundo”, dice Chellew.

Esto se debe, añade, a que los mecanismos destinados a darle solución a la pobreza y sus secuelas no cumplen su cometido, y por otra parte, la inflación acumulada, a nivel de canasta básica, disminuyó el poder adquisitivo de los pobres en por lo menos un tercio neutralizando el crecimiento económico.

Paulina Franceschi, coordinadora del Informe Nacional de Desarrollo Humano, dice que esto es una cuestión de ineficiencia del gasto social.

Panamá frente a países como Chile, Costa Rica y Uruguay muestra un incremento en el gasto social; pero estos tres países han demostrado ser más eficientes en el uso de esos recursos para disminuir la pobreza.

El impacto del gasto social debe verse reflejado en una reducción de la pobreza, en una mejor calidad de vida y una mejora en el empleo.

Pero lamentablemente el impacto se está perdiendo en el camino.

### **Más recursos, ¿mejor inversión?**

Parece mentira que un sector importante de la población urbana y rural todavía padezca tantas necesidades en un territorio donde las fortalezas y recursos económicos brillan por su abundancia.

Para 2010 el presupuesto estatal superará los 10 mil millones de dólares, y el 49.4% se destinará a la deuda social.

La inversión social tiene la particularidad de tener un impacto fiscal inmediato, pero su retorno tarda más tiempo en verse y en Latinoamérica, como en otros mercados emergentes, ha estado históricamente asociada a varios casos de corrupción, lo cual hace que siempre se despierten suspicacias al escuchar de ambiciosos planes en esta área, dice Roberto Sifón Arévalo, director de Standard & Poor's.

Lo cierto es que la constante en Panamá ha sido que mayores recursos no aseguran una reducción importante de la pobreza.

En el año 2004, el gasto social alcanzó los 2 mil 620 millones de dólares, mientras que en 2009 ha llegado a 4 mil 460 millones. Un aumento de mil 840 millones de dólares.

En este gasto social los aportes que hace el Canal de Panamá son importantes, y estos se han incrementado en los últimos años, recuerda Chellew.

Durante la época de Moscoso los aportes del Canal llegaron a 980.6 millones de dólares y la pobreza se redujo en un 3.5%. En el periodo presidencial de Torrijos, dicho aporte fue de 2 mil 953 millones, es decir, 3 veces más, y la pobreza disminuyó solo 4%.

Según la Cepal el 40% de las familias de menos recursos recibe el 10.4% del producto interno bruto (PIB), a diferencia del 10% de las familias de más recursos que recibe el 38.6% del PIB.

Entonces, ¿dónde se está perdiendo el impacto que pueda tener la inversión social?

“Que cuando se divide en cuánto va a funcionamiento del aparataje público y cuánto a inversión, hay una desproporción total”, reconoce Franceschi.

En 2008 el gasto social ascendió a 4 mil 93 millones de dólares. De eso el 80% se destinó a gasto corriente (salarios, parte operativa) y entre 10% y 20% en programas que desarrollan las instituciones para que llegue a la población.

Por su parte, Chellew explica que los recursos que el Estado dirige a mejorar el nivel de vida de la mayoría de los panameños se diluye, debilitando el desarrollo humano sostenible con su secuela de pobreza y descomposición social, que se reflejan en la inseguridad que vive la ciudadanía.

En este punto Chellew coincide con el ex presidente del Colegio de Economistas, Alejandro Cordero, que resalta que para 2010 se espera un alza del presupuesto de 63% en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

“Para cualquier organismo, público o privado, un incremento súbito de tal magnitud en recursos disponibles representa un shock muy difícil de afrontar eficazmente. La experiencia, tanto local como internacional, demuestra que de estos recursos adicionales, más de tres cuartas partes (75%) se va en contratación de burocracia adicional”, dice Cordero.

Los menos favorecidos resultan precisamente aquellos a los que se pretende beneficiar prioritariamente: la población en situación de pobreza extrema y alta vulnerabilidad.

Cordero opina que estas burocracias tienden, con el paso del tiempo, a transformarse en grupos de presión que exigen aumentos salariales adicionales; iniciándose una espiral que termina en aumentos exponenciales de presupuesto.

El Mides aclara que en su presupuesto recomendado de inversión 2010 de 149 millones de dólares, el aumento obedece al proyecto “transferencias 100 para los 70” cuyo monto recomendado es de 84 millones de dólares.

### Tareas de Estado



Los especialistas tienen diversas opiniones sobre las tareas que le corresponde al Estado para que la situación de la pobreza se revierta.

Ramón Barreiro, de Goethals Consulting, dice que la inversión pública no debe restarle espacios a la inversión privada.

Este es el criterio que debe guiar cualquier valoración, según él, sobre un uso adecuado de los recursos contemplados para el presupuesto gubernamental.

“La naturaleza burocrática de la gestión pública, dados los mecanismos de control que exige el uso responsable y transparente de los recursos públicos, hace insostenible un modelo de inversión y desarrollo basado mayoritariamente en inversiones públicas”, indica Barreiro.

La inversión privada debe ser la protagonista del desarrollo sostenible, encontrando en la inversión pública un complemento dirigido a ciertas tareas de carácter institucional que facilitan el desarrollo económico.

“Panamá puede muy bien tener una oportunidad real de alcanzar los objetivos del milenio, pero no pareciera que ésta se deba en ninguna medida a la inversión pública”, dice Barreiro.

Se debe establecer, recomienda, un sistema de medición de la eficacia de los programas sociales que permita determinar si se aporta al desarrollo social y económico de las comunidades.

**CONTRASTE.** Demora en hacerse sentir la inversión pública. LA PRENSA/Archivo

El nuevo gobierno, apunta Gustavo Chellew, debe hacer una re-ingeniería estructural del Estado, que provea al país de un proyecto a

mediano y largo plazo, que obligue a niveles de eficiencia en la ejecución de las obras del área social.

La necesidad de que el Estado haga una reasignación de medios es urgente, según Alejandro

Cordero, dentro del propio sector público con el propósito de que se muevan recursos, desde donde

haya en exceso hacia donde existe reconocida deficiencia y necesidad.

Por su parte, Paulina Franceschi dice que si bien hay una tendencia que apunta a que Panamá está en la dirección de lograr reducir la pobreza, eso no significa que hay que quedarse cruzados de brazos.

Más aún cuando la pobreza en el área rural indígena todavía se mantiene en 57.58% y hay una luz de alerta en el crecimiento de la pobreza en el área urbana.